Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de enero de 2023

**Sra. Farida Shaheed,**

**Relatora Especial sobre el derecho a la educación,**

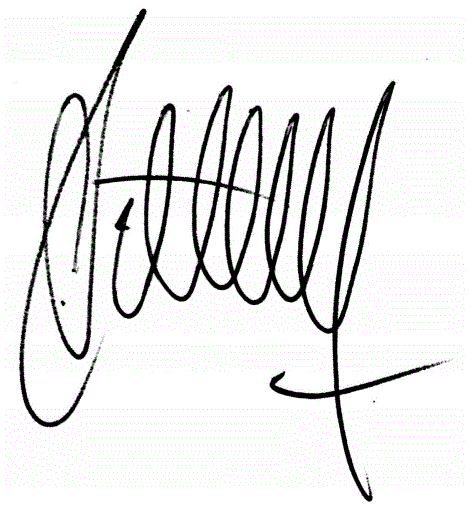
**Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.**

Sra. Relatora,

Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia[[1]](#footnote-1) (ACIJ), una organización apartidaria, sin fines de lucro, dedicada a la defensa de los derechos de los grupos más vulnerabilizados de la sociedad y el fortalecimiento de la democracia en Argentina, nos dirigimos a usted en respuesta a la convocatoria para realizar contribuciones acerca del derecho a la educación, avances y desafíos, con el propósito de brindarle información para su informe temático al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2023.

Específicamente, en esta oportunidad proporcionaremos información relativa al derecho a la educación de las personas con discapacidad en Argentina y las grandes deudas pendientes en relación a garantizar un sistema educativo inclusivo, considerando la trayectoria y experiencia de nuestra organización en esta temática, y la urgencia por garantizar a este colectivo el pleno ejercicio de sus derechos a fin de alcanzar sociedades más justas, diversas e inclusivas.

Agradecemos la oportunidad de participar en esta convocatoria. Quedamos a disposición para realizar cualquier aclaración o añadido sobre la información desarrollada a continuación, y esperamos que nuestra contribución colabore con el objetivo de identificar los principales desafíos actuales del derecho a la educación y las cuestiones cruciales que merecen atención para el futuro.

Saludos cordiales. 

**Pablo Vitale**

Co - Director - ACIJ

**Relatora Especial sobre el derecho a la educación**

**CONVOCATORIA DE CONTRIBUCIONES:**

**EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, AVANCES Y DESAFÍOS**

**Enero 2023**

**Aportes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia**

Tel (+5411) 4381-2371 - info@acij.org.ar

Av. de Mayo 1161, 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

**I. El derecho humano a la educación conlleva la obligación de los Estados de respetar, proteger y realizar el derecho a la educación en la legislación internacional sobre derechos humanos. ¿En qué medida se identifican claramente estas obligaciones en la legislación de su país y en la práctica?**

1. A la luz del marco internacional de derechos humanos, el derecho a la educación es el derecho a la educación inclusiva, porque sólo ella permite garantizar la universalidad y la no discriminación en el ejercicio de ese derecho. Desde este punto de vista, la inclusión no es una mera modalidad u opción organizativa, sino que se halla en el corazón mismo de la finalidad de la educación, constituyéndose en el principio que la orienta y sustenta. Además, el artículo 24 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina en 2008 y con jerarquía constitucional a partir del año 2014, explicita con claridad el contenido de este derecho y obliga a los Estados a tomar medidas para que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación. Sin embargo, en Argentina la legislación nacional y local no recepta plenamente estas obligaciones, por lo que persisten las barreras normativas a la educación inclusiva.
2. El sistema educativo argentino continúa organizándose en torno a un sistema de educación común y un subsistema de educación especial destinado a aquellos alumnos que, debido a su discapacidad, son excluidos del sistema común y segregados en escuelas de educación especial. Ello encuentra su fundamento en la ley de Educación Nacional 26.206[[2]](#footnote-2), norma contraria a la CDPD y demás instrumentos internacionales de derechos humanos[[3]](#footnote-3) en tanto refuerza un sistema educativo segregado donde la única variable para discriminar es la discapacidad, al mantener vigente y como modalidad principal para personas con discapacidad la educación especial y al no incorporar las obligaciones estatales previstas en el art. 24 de la CDPD y concordantes.
3. En particular señalaremos a continuación algunas disposiciones que son abiertamente contrarias a la CDPD. En primer lugar, el artículo 11 inciso n), en cuanto establece como un fin de la educación: *“Brindar a las personas con discapacidades, temporales o permanentes, una propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos”*. Destacamos aquí que el máximo desarrollo de sus posibilidades es un objetivo limitado a las personas con discapacidad, cuando debería estar presente en la educación de todas las personas. Ello deja entrever la persistencia del modelo médico rehabilitador de la discapacidad, en el cual subyace una idea de “normalidad” y lo que se busca es que la persona, mediante diferentes estrategias (en general tratamientos), se acerque lo más posible a la “normalidad”, lo cual se identifica como el logro máximo de las posibilidades de una persona con discapacidad. A su vez, el mismo inciso habla de “integración”, concepto que no puede equipararse de ninguna manera al de inclusión, como quedó claramente definido en la Observación General Nro. 4.
4. Luego, la ley en cuestión establece ocho modalidades y las define como: *“aquellas opciones organizativas y/o curriculares de la educación común, dentro de uno o más niveles educativos, que procuran dar respuesta a requerimientos específicos de formación y atender particularidades de carácter permanente o temporal, personales y/*o *contextuales, con el* propósito *de garantizar la igualdad en el derecho a la educación*”. La Educación Especial está contemplada como una modalidad, y luego es definida, en el artículo 42 de la ley, como: ¨la *modalidad del sistema educativo destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo*”,que “*brinda atención educativa en todas aquellas problemáticas específicas que no puedan ser abordadas por la educación común. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, garantizará la integración de los/as alumnos/as con discapacidades en todos los niveles y modalidades según las posibilidades de cada persona*”.
5. Así, desde la misma definición que brinda la Ley Nacional de Educación, la Educación Especial es concebida como un subsistema, dado que es la única modalidad que no funciona dentro de la educación común como, por definición de modalidad dada por la misma ley, funcionan el resto de las modalidades. Además, confiere atención específica por fuera de la escuela común, y cualquier posibilidad de integración (reiteramos, la ley no habla de inclusión) queda sujeta a *¨las posibilidades de cada persona¨.*
6. En virtud de lo expuesto precedentemente, destacamos que el sistema normativo argentino aún tiene normas fundamentales contrarias al derecho a la educación inclusiva, y por lo tanto, al derecho a la educación. A pesar de algunos avances registrados en los últimos años e impulsados por la sociedad civil mediante diversas y confluyentes estrategias, esta ley nacional continúa condicionando todo el sistema, reflejándose en las leyes provinciales, en normas de inferior jerarquía, y en las políticas y las prácticas educativas a lo largo de todo el país.
7. Como consecuencia, es urgente que el Estado Argentino proceda a la modificación de su Ley Nacional de Educación para adecuarla a la CDPD y a la legislación internacional sobre derechos humanos, y comience a proyectar e implementar un proceso de transición de una educación segregada y especial a una educación verdaderamente inclusiva para todas las personas.

**II. ¿En qué medida se respetan los principios de no discriminación e igualdad en la aplicación del derecho a la educación en su país?**

1. Bajo el marco internacional de derechos humanos, todas las personas, sin excepción, tienen el derecho a educarse juntas, en los mismos establecimientos educativos, aprendiendo, participando y progresando en condiciones de igualdad, independientemente de sus características y la situación particular o social en la que se encuentren. Sin embargo, en Argentina persisten grandes deudas a la hora de garantizar la no discriminación y la igualdad en el derecho a la educación. Entre los grupos que continúan siendo discriminados, las personas con discapacidad enfrentan formas particulares de exclusión y violencia basadas en el capacitismo, y enfrentan serias barreras económicas, simbólicas, físicas, comunicacionales y culturales para poder acceder al derecho a la educación, en todos los niveles.
2. En nuestro país, las personas con discapacidad ven vulnerado su derecho a la educación fundamentalmente de tres formas: algunas de ellas están absolutamente excluidas del sistema educativo, debido a que se encuentran institucionalizadas o recluidas al interior de sus hogares; otras permanecen segregadas en escuelas especiales, como consecuencia del marco normativo enunciado previamente; y otras asisten a las escuelas generales o a establecimientos de educación superior, pero sin recibir los apoyos y ajustes que requieren para aprender, participar y progresar en condiciones de igualdad con las demás personas.
3. Según los últimos datos disponibles, extraídos del Relevamiento Anual de la Dirección de Información y Estadística Educativa del Ministerio de Educación de la Nación correspondiente a 2021, aún hay 101.107 niños, niñas adolescentes y jóvenes que estudian en escuelas especiales[[4]](#footnote-4). De acuerdo a datos de esta misma fuente para el año 2020[[5]](#footnote-5), sobre el total de personas con discapacidad escolarizadas, el 39,8% asiste a escuelas especiales, y de ellos, el 65,5% tiene discapacidad intelectual. Esto se refleja en la baja proporción de personas con discapacidad en relación a la matrícula total de escuela común, que no supera el 1,39%. La situación es más preocupante en el nivel secundario: la cifra de estudiantes con discapacidad segregados/as en escuelas especiales asciende al 47,63%, y estos/as sólo representan el 1,06% del alumnado en escuelas comunes. En algunas provincias la situación es más alarmante aún, ya que más de la mitad de los y las estudiantes con discapacidad asiste a una escuela especial. Por ejemplo, en la Provincia de Corrientes este porcentaje es del 54%, en Misiones es del 53,8%, en San Juan del 52% y en Chaco del 51,3%[[6]](#footnote-6).
4. Los y las estudiantes con discapacidad todavía se enfrentan a sistemáticos rechazos a la matriculación en escuelas comunes públicas y privadas, y son frecuentemente derivadas a escuelas especiales vulnerando su voluntad y la de sus familias, sin que los gobiernos ejerzan efectivamente sus facultades de control y sanción. En este contexto, en el marco de una acción judicial iniciada en 2019 por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia con el asesoramiento de la Clínica Jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la que se denunció la inacción de las autoridades frente al continuo rechazo de matriculación a estudiantes con discapacidad en escuelas privadas, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires declaró la inconstitucionalidad de la conducta omisiva del gobierno de esta jurisdicción y le ordenó presentar una propuesta de política pública para garantizar el ingreso de las personas con discapacidad a las escuelas generales[[7]](#footnote-7). Esta situación no es propia de la Ciudad de Buenos Aires, sino que se presenta en todo el país.
5. A estos obstáculos para el ingreso y la continuidad de estudiantes con discapacidad en el sistema general de educación se suma la inexistencia de políticas adecuadas para asegurar la plena accesibilidad física y comunicacional del sistema educativo en su conjunto, y para garantizar los apoyos y ajustes necesarios que permitan a aquellos estudiantes que ingresan al sistema general sostener trayectorias educativas valiosas y en condiciones de igualdad. Los servicios de apoyo existentes suelen ser escasos, fragmentados, discontinuos y pensados desde el modelo médico. En este sentido, un informe realizado por la Asociación Civil por la igualdad y la Justicia[[8]](#footnote-8) señala que el 33,5% de las personas encuestadas no contaban con figuras de apoyo, y de ese porcentaje, el 81,5% indicó que fue porque no las consiguieron a pesar de necesitarlas. Además, el 57% de las personas indicó haber tenido problemas con la cobertura del personal de apoyo. En las escuelas también se observan también otras formas de discriminación, tales como la imposición de jornadas reducidas, de repitencias y la resistencia a modificar las formas de evaluación.
6. A ello se suman los obstáculos del estudiantado con discapacidad para certificar aprendizajes en igualdad de condiciones y obtener titulaciones equivalentes sin discriminación, la ausencia de mecanismos independientes de reclamo y resolución adecuada y rápida de conflictos relacionados con violaciones del derecho a la educación inclusiva, así como la falta de políticas de formación docente inicial y continua en el modelo social de la discapacidad y en el derecho a la educación inclusiva.
7. Con respecto al nivel superior, no existen políticas y programas nacionales y sistemáticos, ni presupuestos específicos, destinados a promover la accesibilidad plena de los establecimientos de educación superior de todo el país, ni a garantizar a las y los estudiantes con discapacidad de apoyos que aseguren su ingreso y permanencia.
8. Finalmente, persiste la falta de producción de información oficial completa y actualizada sobre la trayectoria educativa de personas con discapacidad (tasas de egreso, de repitencia, de abandono, de sobre edad, entre otros), y las barreras y obstáculos que experimentan en el acceso, permanencia y egreso en el sistema educativo. Tampoco existe información sobre las condiciones y recursos disponibles para la inclusión en las escuelas públicas y privadas de todas las jurisdicciones del país (por ejemplo, la cantidad y tipo de apoyos efectivamente disponibles y la demanda insatisfecha), ni sobre el presupuesto destinado por el gobierno nacional y los gobiernos locales a educación inclusiva.

**III. ¿Cuáles son las cuestiones cruciales que hay que abordar, tanto a nivel nacional como internacional, para garantizar la realización del derecho a la educación?**

1. Tal como se ha expuesto previamente, el sistema educativo argentino actual continúa segregando sistemáticamente a las personas con discapacidad, al generar numerosas y profundas inequidades, obstáculos y barreras a su trayectoria educativa en la educación común. Como consecuencia, para garantizar la realización del derecho a la educación para todas las personas es crucial que a nivel nacional se diseñe un plan y una política integral para transformar el sistema educativo argentino en un sistema inclusivo, que aborde las diferentes prácticas, políticas y culturas educativas que generan la exclusión con miras a su reforma estructural. Este enfoque supone transicionar hacia un sistema que celebren la diversidad, al tiempo que respete y valore toda singularidad.
2. Ello demanda repensar de forma integral a nivel nacional y provincial las normativas, las currículas, los sistemas de inscripción, los materiales educativos, los edificios y las instalaciones, las políticas de formación docente inicial y en servicio, los diferentes dispositivos de apoyo a la inclusión, las barreras actitudinales de toda la comunidad educativa, las prácticas dentro del aula, las diferentes dinámicas institucionales, los sistemas de evaluación, las políticas de información, los sistemas de reclamo, sanción y reparación, los sistemas de producción de información, entre otras cuestiones. Reiteramos también, que esta transición es un deber jurídicamente vinculante para el Estado argentino, en tanto se encuentra previsto en numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos, tanto del ámbito universal como regional.
3. Es fundamental que en dicho proceso de reforma se asegure la participación de organizaciones de personas con discapacidad, de conformidad con el artículo 4.3 de la CDPD. El plan debe establecer objetivos claros, acciones precisas orientadas a esos objetivos, plazos concretos, recursos materiales asignados e indicadores de proceso y resultados, que permitan su monitoreo y evaluación.
4. Cabe señalar finalmente, que un modelo educativo inclusivo trasciende la educación de las personas con discapacidad, pues se trata de abrir los establecimientos educativos y garantizar efectivamente el derecho a la educación a todo tipo de estudiantes. En consecuencia, la omisión del Estado en implementar políticas educativas inclusivas afecta no sólo a la niñez y adolescencia con discapacidad, sino también a muchos/as otros/as niños/as y adolescentes que enfrentan otras situaciones de vulnerabilidad y son excluidos/as de un sistema educativo no preparado para atender a la diversidad de los/as estudiantes. En definitiva, la transición hacia un sistema educativo plenamente inclusivo es crucial para sentar las bases de una sociedad plural, equitativa, igualitaria y justa para todas las personas, en donde se reconozca que todas ellas son igualmente valiosas, pueden hacer realidad sus proyectos de vida y aportar a las comunidades en las que viven.

1. Para acceder a más información sobre ACIJ ingresar a <https://acij.org.ar/> [↑](#footnote-ref-1)
2. Texto actualizado de la norma disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/texact.htm> [↑](#footnote-ref-2)
3. Por ejemplo, el Estudio Temático de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos sobre el derecho a la educación de personas con discapacidad (diciembre de 2013), A/HRC/25/29, en su punto 60 establece “La transformación de las escuelas especiales en centros de recursos para la inclusión es importante. Algunos sistemas de integración han incorporado ya está medida a su legislación”. [↑](#footnote-ref-3)
4. Anuario estadístico educativo 2021 disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-informacion-educativa/anuarios> [↑](#footnote-ref-4)
5. Anuario estadístico educativo 2020 disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-informacion-educativa/anuarios>. Para completar esta información y obtener datos desagregados se realizó un pedido de acceso a la información pública en los términos de la Ley 27.275 a la Dirección Nacional de Información, Evaluación y Estadística Educativa, y en base a la información brindada se construyó este dato. Estos datos aún no se hallan disponibles para el año 2021. [↑](#footnote-ref-5)
6. Información completa disponible en: <http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2022/12/FactSheet.pdf> [↑](#footnote-ref-6)
7. La sentencia completa se encuentra disponible en: <https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2022/06/Sentencia-Primera-Instancia-Amparo-colectivo.pdf> [↑](#footnote-ref-7)
8. Disponible en: <https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2022/03/Apoyos-para-la-educacion-inclusiva_-datos-que-evidencian-barreras.pdf> [↑](#footnote-ref-8)